

RADICAL RADIO Y OTROS

VS.

CHIRILAGUA

REPÚBLICA FEDERATIVA DE CHIRILAGUA

2) ÍNDICE

	Página
- Bibliografía	3
<i>a) Doctrina y Documentos Legales</i>	3
<i>b) Casos Legales</i>	4
- Exposición de los hechos	10
- Análisis legal del caso	11
<i>a) Análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad</i>	12
<i>b) Análisis de fondo</i>	20
- Petitorio	39

3. Bibliografía

3.1 Doctrina y Documentos Legales

3.1.1 Doctrina

- Carrillo, Marc, El *Recurso de Amparo y la Protección a la libertad de expresión*, Universidad de Pompeu Fabra (Barcelona).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, “*Un Cuarto de Siglo: 1979-2004*”. 1ra. Edición, 2005.
- Chillón, José María., “Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información”, Edición 2004.
- Guedj.,Alexis « *Liberte et responsabilite du journaliste dans l'ordre juridique européen et international* ». Editions Nemesis, 1ra Edición. Bélgica, 2003.
- García Ramírez, Sergio “Atribuciones Jurisdiccionales de la Corte Interamericana”, Investigaciones Jurídicas UNAM, documento en Pdf, disponible en www.bibliojuridica.org/libros/1/324/10.pdf.
- García Ramírez, Sergio/ Alejandra Gonza, “Libertad de pensamiento y Expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, Costa Rica, 2007.
- García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Anuario iberoamericano de justicia constitucional”, ISSN 1138-4824, N°. 3, 1999.
- Kaplan & Sadock. “*Sinopsis de Psiquiatría*”. Editora Lippincott Williams & Wilkins. 10ma. Edición. España, 2008.
- Rodríguez Pinzón, Diego, “El derecho a la Honra y la Reputación”, presentado ante el IV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) en septiembre de 1999. artículo disponible en: <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/red/articulos/honra-peru.htm>

- Strossen, Recent, U.S. *and International Judicial Protection of Individual Rights: A Comparative Legal Process Analysis and Proposed Synthesi.*

3.1.2 Documentos Legales

- *Declaración Universal de Derechos Humanos.* Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.
- *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.* Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.
- *Convención Americana de Derechos Humanos.* Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144, entrada en vigor en fecha 18 de julio de 1978.
- *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.* Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- *Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su 116º período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002.

3.2 Casos Legales

3.2.1 Jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.2.1.a) Casos Contenciosos

- *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras.* Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6.
- *Caso Bautista vs. Colombia.* CCPR/C/55/D/563/1993. Sentencia del 13 de noviembre de 1995.

- *Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina*. Fondo. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26
- *Caso Arhuacos vs. Colombia.*, CCPR/C/60/D/612/1995. Sentencia del 19 de agosto de 1997
- *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34
- *Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39
- *Caso Cesti Hurtado vs. Perú*. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56.
- *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C No. 61
- *Caso Durand Ugarte vs. Perú*. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68.
- *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*.
- *Caso Cantoral Benavides vs. Perú*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.
- *Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.
- *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.
- *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74.
- *Caso Barrios Altos Vs. Perú*. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.
- *Caso Cantos vs. Argentina*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85.
- *Caso Maritza Urrutia*. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103.

- *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
- *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.
- *Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador*. Fondo. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120.
- *Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname*. Fondo. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.
- *Caso Yatama vs. Nicaragua*. Fondo. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135.
- *Caso Acevedo Jaramillo y Otros vs. Perú*. Fondo. Sentencia del 7 de febrero del 2006. Serie C No. 144.
- *Caso Vargas Areco vs. Paraguay*, Sentencia 26 de septiembre de 2006, Serie C, No. 155.
- *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170
- *Caso Kimel vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177.
- *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182
- *Caso Perozo y otros vs. Venezuela*, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195.

3.2.1.b) Opiniones Consultivas

- Corte IDH -*La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5.
- Corte IDH -*El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías* (arts. 27.2, 25.1 y 7.6), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987.
- Corte IDH *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia*, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987 Serie A No. 9.
- Corte IDH -Opinión Consultiva OC-6/86, *La Expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, serie A No.6*

3.2.1.c) Votos y Declaraciones de los Jueces

- Declaración del *Juez Máximo Cisneros*. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre 1985, (Ser. A) No. 5 (1985).
- Voto disidente del Juez *ad-hoc Pier Polo Pasceri Scaramuzza*, en el Caso Perozo y otros vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197.

3.2.2 Informes

- COIDH -“*Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994*”, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. 1995.
- COIDH Informe sobre, “*El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*”, del 7 septiembre 2007.

- CIDH, Informe sobre *La compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos*, aprobado en el 88º período de sesiones, Washington D.C., 17 de febrero de 1995
- CIDH, Informe del relator especial para la libertad de expresión, del año 2002, disponible en <http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?IID=2>
- Informe No. 52/97, caso 11. 218, Arges Sequeira Mangas Vs. República de Nicaragua, 18 de febrero de 1998, p.
- COIDH -*Caso Marzioni vs. Argentina*. Informe No. 39/96. Caso 11.673 del 15 de octubre de 1996.
- COIDH -*Caso Juan Hernández vs. Guatemala*. Informe No. 28/96. Caso 11.297 del 16 de octubre de 1996.
- COIDH -*Caso Carranza Vs. Argentina*. Informe No. 30/97. Caso 10.807 del 30 de septiembre de 1997.
- COIDH -*Caso Gómez López vs. Venezuela*. Informe No. 82/98. Caso 11.703 del 28 de septiembre de 1998.
- COIDH -*Caso Ernesto Galante vs. Argentina*. Informe No. 70/01. Caso 12.055 del 3 de agosto de 2001.
- COIDH-Informe No. 64/05, caso *Yvonne Neptune vs. Haití*. Caso 445/05 del 12 de Octubre del 2005.
- COIDH -Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima c, Perú, del 22 de febrero de 1991
- COIDH Informe nº 67/00,7, Fernando Ribadeneira Fernández Salvador Ecuador, 3 de octubre de 2000.
- COIDH- Informe 89/03. *Caso Mariblanca Staff Wilson y Oscar E. Ceville vs. Panamá*, petición 12. 303 de fecha 22 de octubre del 2003.

- CIDH, Relatoría para la Libertad de expresión, informe, sobre responsabilidades Ulteriores por declaraciones, (1996-2004) disponible en <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=153&IID=2>

3.2.3 *Jurisprudencia Corte Europea de Derechos Humanos*

- Corte EDH - *Caso Castells vs. España*. Sentencia del 23 de abril de 1992.
- Corte EDH - *Caso Cumpana y Mazare vs. Rumania*. / sentencia del 1996.
- Corte EDH - *Caso Brusco vs. Italia* (déc.), nº 69789/01; CEDH 2001-IX.
- Corte EDH - *Caso Sardinas Albo vs. Italia* (déc.), nº 56271/00; CEDH 2004-I.
- Corte EDH - *Caso de Meltex LTD y Mesrop Movsesyan vs. Armenia (Application no. 32283/04)* Sentencia del 17 de Junio de 2008.
- Corte EDH - *Caso Kozacio Lu vs. Turquía*, Estrasburgo, Sentencia del 19 Febrero de 2009.
- Corte EDH *Caso Scoppola c. Italie*, sentencia del 17 de septiembre 2009,
- Corte EDH *Caso Handyside c. el Reino Unido*, 7 de diciembre de 1976
- Corte EDH *caso Oberschlick C. Austria*, sentencia del 1ro de Julio de 1997

3.2.4 *Jurisprudencia de otros Tribunales*

- Tribunal Penal Internacional para Rwanda, *Caso de la Fiscalía vs. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze*. No. ICTR-99-52-T. Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2003
- Corte Internacioanal de Justicia, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970*.

4) EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

La República Federativa de Chirilagua (en lo adelante “Chirilagua” o el “Estado”) ha contado con una democracia estable, en la misma se ha alternado el poder político tradicionalmente entre dos partidos: el Partido Chirilaguense Popular (en lo adelante “PCP”) y el Partido por la Renovación Democrática de Chirilagua (en lo adelante “RDC”). En el 2006 ganó las elecciones presidenciales el Sr. Atilio Escalante Norris del partido PCP contando con el apoyo del 60% de la población.

El PCP propuso en las elecciones generales para Diputados Federales de 2008 que se permitiera una consulta popular denominada la “Papeleta de la Democracia”. Mediante la misma se proponía que quienes desearan la continuación del gobierno del Presidente Escalante introdujeran en las urnas una papeleta adicional, siendo el resultado de esta encuesta no vinculante.

Los líderes del RDC se opusieron abiertamente a la aprobación de la Papeleta. Por lo que dos meses antes de las elecciones un grupo de estudiantes convocó a través de un grupo de la red social Facebook una marcha nacional en contra de esta iniciativa. Su mensaje comenzó a expandirse rápidamente alcanzando distintas cadenas de radio como Radical Radio y Radio Su-Versión. La marcha, la cual se denominó el Facebookazo fue convocada para realizarse una semana antes de las elecciones.

El 3 de marzo de 2008, el Facebookazo se llevó a cabo en varias ciudades del país. En varias |de las marchas se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del partido oficialista, así como entre marchantes y miembros de la Guardia Federal lo que provocó personas heridas y muertas. Luego, el 10 de marzo de 2008 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en las cuales se incluyó la Papeleta, en las mismas la coalición del gobierno tuvo una amplia victoria, pero las elecciones se vieron afectadas por una abstención del 70%. Disturbios se volvieron a presentar en varias zonas del país dejando heridos y muertes nuevamente.

Luego de esto, COFERETEL inició una revisión de las concesiones de radio y televisión. Producto de esto se dispuso el cierre de las concesiones otorgadas a 40 emisoras de radio que no cumplían con los requisitos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Entre estas emisoras se encontraban Radical Radio y Radio Su-Versión.

El 25 de junio de 2008 el Ministerio Público imputó a más de 30 personas, entre ellas Byron Dayle, Melanie Pereira y Francis Hoffman por la presunta comisión del delito “hurto de bienes del Estado”. Posteriormente también fueron acusados de “instigación a delinquir” y “difamación”. Junto a ellos también fue acusado William Garra, periodista de Radical Radio por “homicidio”, “difamación” e “instigación a delinquir”.

Se les encontró culpables de los delitos anteriormente mencionados, a excepción del Sr. Byron Dayle quien fue descargado de toda imputación. Las sentencias fueron apeladas por las víctimas, pero las mismas fueron ratificadas por la Corte de Apelación.

Finalmente, el 2 de diciembre de 2008 la Federación Interamericana de Medios por la Democracia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo adelante la “Comisión”) alegando supuestas violaciones a los Arts. 7, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en lo adelante la “Convención”). Entre estos sólo fueron admitidos por la Comisión los Arts. 8, 13 y 25; y mediante un informe sometió el presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo adelante la “Corte”).

5. ANÁLISIS LEGAL

Dado que Chirilagua es miembro fundador de la Carta de la Organización de Estados Americanos (en lo adelante la “OEA”) y ha ratificado todos los tratados de derechos humanos, así como ha

aceptado la jurisdicción de la Corte, la misma es competente para conocer de este caso en términos del Art. 62.3 de la Convención.

El Estado somete a consideración de esta Honorable Corte el siguiente memorial, en el cual expondrá sus argumentos, para demostrar que bajo ninguna circunstancia ha violentado los derechos consignados en la Convención. En un primer lugar se abordarán las causas por las cuales la presente demanda es inadmisibile bajo los términos de la Convención, y posteriormente de modo subsidiario se expondrán los argumentos con los cuales el Estado demostrará que no ha transgredido ninguno de los derechos alegados por la Comisión.

5.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PRELIMINARES DE ADMISIBILIDAD

En el presente caso la Honorable Corte tiene competencia *ratione materiae*, *ratione loci* y *ratione temporis*, mas no debe de conocerlo debido a que presenta cuestiones de inadmisibilidad que impiden que esta Magnánima Jurisdicción pueda admitir la demanda.

5.1.1 Primera excepción preliminar: No agotamiento de los Recursos Internos

Antes de dirigirse a cualquier instancia internacional, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna de un Estado según los principios del Derecho Internacional reconocidos.¹ En este tenor, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que es facultad de los Estados en primer lugar,² el investigar a fondo las

¹ Cfr.; Corte IDH. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname*. Fondo. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Párr. 48; *Caso Herrera Ulloa*. Fondo. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párr. 80.

² Cfr.; CIDH. *Ernesto Galante Vs. Argentina*. Informe No. 70/01. Caso 12.055. 3 de agosto de 2001. Párr. 66

presuntas violaciones de Derechos Humanos, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones.³

De lo anterior se infiere que esta Magna Corte es de naturaleza coadyuvante, complementaria y subsidiaria al derecho interno de los Estados⁴, siendo estos quienes otorgan respuesta en primera instancia a las situaciones que se suscitan. En consecuencia, es en quien recae el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio⁵, así como el deber de reparar posibles transgresiones a los Derechos Fundamentales.

En ese sentido, en el caso de la especie, es evidente que no se han agotado efectivamente los recursos internos, al existir un proceso pendiente de fallo, sometido por el Sr. Byron Dayle como representante legal de Radical Radio ante las instancias administrativas del Estado, el cual se encuentra en etapa probatoria en razón de que el “peticionario posee obligaciones pendientes con los tribunales para que se pueda poner fin al proceso”.⁶ De este modo se evidencia la existencia de un proceso que claramente se encuentra en marcha y, que de admitirse el caso por esta Ilustre Corte, no rendiría efectos concretos.

En ese sentido la decisión pendiente en el Tribunal Administrativo es determinante para resolver las situaciones de los peticionarios, independientemente sean acogidas o no sus solicitudes. Las acciones interpuestas ante los Tribunales Constitucionales estaban destinadas a determinar si los

³ Cfr.; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. *Caso Arhuacos v. Colombia.*, CCPR/C/60/D/612/1995. Sentencia del 19 de agosto de 1997, párr. 8.8; *Caso Bautista v. Colombia* CCPR/C/55/D/563/1993. Sentencia del 13 de noviembre de 1995, párr. 8.6.

⁴ Cfr. CIDH. *Gómez López Vs. Venezuela*. Informe No. 82/98. Caso 11.703 del 28 de septiembre de 1998. Párr. 21; CIDH. *Marzióni Vs. Argentina*. Informe 39/96. Caso 11.673 del 15 de octubre de 1996. Párr. 48.

⁵ Cfr. Corte IDH. *Yvonne Neptune Vs. Haití*. Informe No. 64/05. Caso 445/05 del 12 de Octubre del 2005. Párr. 25; CIDH. *Juan Hernández Vs. Guatemala*. Informe No. 28/96. Caso 11.297 del 16 de octubre de 1996. Párr. 43

⁶ COID Informe nº 67/00, caso 12.267, *Fernando Ribadeneira Fernández vs Ecuador*, 3 de octubre de 2000, Párr.20

peticionarios habían sido víctimas de alguna violación a un derecho fundamental, en razón de su carácter de acción de amparo o tutela.⁷

En cuanto no era competencia del Tribunal Constitucional realizar una valoración del plano fáctico bajo el cual se ordenó la cancelación de la concesión, sino más bien observar si hubo vulneración de los derechos alegados por los demandantes, en el caso concreto a la libertad de expresión, debido proceso y derecho a la información de la comunidad⁸. Esto fue claramente desestimado, por no existir violación alguna a la libertad de expresión e información, y mucho menos “indicio de violación a las garantías procesales”.⁹

De lo anterior se evidencia que la Comisión ha vulnerado su propio reglamento¹⁰ al someter el presente caso al conocimiento de esta Benemérita Corte, sin haber verificado el previo agotamiento de los recursos que ofrece el Estado de Chirilagua. Los demandantes no sólo contaban con un proceso en etapa probatoria que pudo permitirles obtener un resultado ante los Tribunales Internos, sino también que de no estar de acuerdo con la sentencia que dicte el Juez inferior tenían la posibilidad de interponer un recurso de apelación por ante la Sala Político Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Chirilagua.

Más aún, las reclamaciones ante el Sistema Interamericano fueron interpuestas el 2 de diciembre de 2008, mientras que el proceso administrativo quedó en etapa probatoria el 15 de enero de 2009, de modo que un mes antes de obtener respuesta ya habían acudido al Sistema Interamericano, evidenciando así que los demandantes en ningún momento han pretendido obtener un resultado a nivel interno.

⁷ Respuesta No. 68, XV Concurso Interamericano de Derechos Humanos, Respuestas aclaratorias a las preguntas del Caso.

⁸ Hechos del Caso Hipotético, Párr.35

⁹ Corte EDH, *Caso de Meltex LTD y Mesrop Movsesyan vs. Armenia*, Sentencia 17 de Junio de 2008, P.91

¹⁰ Cfr. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Art. 34.

En ese sentido debe considerarse que el recurso pendiente era determinante para los fines propuestos por el Sr. Dayle y por los demás demandantes ante el Sistema, en razón de que las alegadas vulneraciones de la Convención sólo parecen suscribirse en razón de la cancelación de las emisoras. Por tales razones es imprescindible haber esperado el agotamiento de la vía de los recursos internos¹¹ pues el no agotamiento no puede sostenerse en “el simple hecho de alimentar dudas en cuanto a las perspectivas de éxito de un recurso dado, que no se encuentra obviamente destinado al fracaso, pues no constituye una razón válida para justificar la no utilización de recursos internos.”¹²

En el caso concreto es claro que el recurso pendiente “podía haber satisfecho alguna o todas las pretensiones contenidas en la demanda,”¹³ principalmente la nulidad de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico de las emisoras, lo cual es además el punto de partida de las alegadas transgresiones a la Convención. “En efecto, la norma del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna ha sido instaurada en beneficio del Estado Parte en la Convención, estando el peticionario obligado a demostrar que los ha agotado.”¹⁴

Aunado a lo anterior cabe destacar que los recursos interpuestos ante el Poder Judicial de Chirilagua eran adecuados y efectivos en vista de que habían dado respuesta satisfactoria a una petición. Esta Honorable Corte, por tanto, no puede ser apoderada de un caso si no se han agotado previamente las instancias estatales correspondientes.

5.1.2 Segunda excepción preliminar: Las personas Jurídicas no pueden ser demandantes ante el sistema interamericano.

¹¹ Corte EDH. *Asunto Kozacio_Lu c. Turquía*, Estrasburgo, Sentencia del 19 Febrero de 2009, párr.37

¹² Corte EDH *Caso Scoppola c. Italie*, sentencia del 17 de septiembre 2009, párr.70

¹³ Corte IDH. *Voto disidente del Juez ad-hoc Pier Polo Pasceri Scaramuzza*, en el caso Perozo y otros vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197

¹⁴ CIDH Informe No. 52/97, caso 11. 218, Arges Sequeira Mangas Vs. República de Nicaragua, 18 de febrero de 1998, párr.120

“Cuando se somete un caso ante la jurisdicción de la Corte para que ésta determine si el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos”¹⁵ se debe considerar si los peticionarios son susceptibles de demandar ante el sistema interamericano, a la luz de las disposiciones aplicables.¹⁶ El Art. 1 de la Convención establece que “para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”¹⁷

Los derechos humanos corresponden evidentemente a la persona humana, es decir, a la persona física. Por tanto, la Corte “no tiene jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías.”¹⁸ “La Convención señala lo que debe entenderse bajo este último término, de manera que no podría tutelarse pues, a la persona moral o colectiva, que no tiene derechos humanos”.¹⁹ Los derechos humanos protegen a la persona humana.

La expresión “persona es todo ser humano” utilizada por la Convención parece no estar sujeta a interpretación, no obstante en opinión de la Corte “si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención (...) esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema de Derecho.”²⁰

Que a este respecto el Estado tiene total conocimiento de que en la actualidad la protección a ciertos derechos fundamentales se extiende al ámbito de las personas morales.²¹ Empero ello no implica que dicha concepción se extienda a todos los derechos contemplados en la Convención,

¹⁵ Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, p.65

¹⁶ Corte IDH. Caso Perozo y otros, supra, p.65

¹⁷ Artículo 1 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144, entrada en vigor 18 de julio de 1978.

¹⁸ I Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima c, Perú, del 22 de febrero de 1991, párr.8

¹⁹ Sergio García Ramírez, “Atribuciones Jurisdiccionales de la Corte Interamericana”, Pág. 93

²⁰ Corte IDH, Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, Párr.29 (el énfasis es nuestro.)

²¹ Sergio García Ramírez, “Atribuciones Jurisdiccionales de la Corte Interamericana”, p.93

como la libertad de expresión en el caso concreto. Inclusive el artículo 1º del protocolo 1 a la Convención Europea relativo al “derecho de la propiedad”, se refiere al derecho respecto de los bienes tanto de personas físicas como morales, y no de todos aquellos derechos contemplados en la Convención. Así lo demuestra la Corte al sostener en el Caso Herrera Ulloa que en razón del “artículo 1.2 de la Convención (...) será necesario examinar el contexto dentro del cual el asunto se presenta y determinar, de acuerdo al objeto y fin de la Convención, si el interés principal en juego involucra los derechos del ‘ser humano’ reconocidos por ésta”.²²

De modo que es necesario distinguir las situaciones que podrían ser analizadas bajo el marco de la Convención,²³ pues si bien la Corte ha reconocido en determinados supuestos que las personas morales pueden reclamar ante el Sistema, no menos es cierto que sólo ha sido a los fines de proteger a las personas físicas, cuando el interés principal en juego involucra los derechos del “ser humano.”²⁴ En el caso en especie nos encontramos con derechos que no le han sido reconocidos a las personas jurídicas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por otro lado, la Corte ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma.²⁵ En este caso es un hecho no controvertido que la Sra. Pereira y el Sr. Dayle son accionistas de Radical Radio. Pero para sostener una demanda ante el sistema interamericano sería necesario que los mismos probaran, en primer lugar una violación a los derechos de la empresa y que dicha afectación se traduzca en una afectación de sus propios derechos en tanto accionistas de la empresa,²⁶ lo cual no tiene aplicación en el caso concreto.

²² Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, *supra* nota No. Sentencia, Párr.1 102.5,

²³ Corte IDH, Caso Perozo y otros Vs Venezuela, *Supra* nota No.13, en ese mismo sentido Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párrs. 123, 125, 138 y 156

²⁴ Corte IDH, Caso Herrea Ullos vs Costa Rica, *Supra* nota No. 1 párr..102

²⁵ *Cfr.* Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú*, *supra* nota No. 23 , párr. 127 y *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Ñíguez. Vs. Ecuador*,, párr. 181, CorteIJ. *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970*, p. 36, para. 47.

²⁶ *Cfr* Corte IDH, *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*, *supra* nota No. 13, Párr. 402

En tanto todos los accionistas han demandado ante el Sistema como personas físicas, alegando la violación a los mismos derechos que alegan las personas morales, lo cual de ser aceptado se traduciría en una amenaza para el Estado, que se vería juzgado dos veces por el mismo hecho. Como personas físicas las supuestas víctimas alegarían violaciones a los derechos humanos, y en tanto, como personas morales reclamarían las mismas violaciones, ya antes alegadas como personas físicas.

En cuanto al señor Francis Hoffman, éste no ostentaba la calidad de accionista, por lo que Radio Su-Versión, como persona moral no puede alegar violación a los derechos humanos de forma independiente, sin que una persona física haya sufrido una afectación como consecuencia de la transgresión al derecho alegado. Por lo que en miras a hacer una correcta aplicación del Derecho es necesario rechazar el presente Caso por no contar con lo necesario para ser admisible ante esta Honorable Jurisdicción.

5.1.3 Tercera excepción preliminar: Aprobación de una nueva ley orgánica que regula la concesión de licencias de manera tripartita.

Como respuesta a la petición de la Comisión y de las alegadas víctimas el Estado ha trazado un proceso aún más equitativo en materia de concesión de licencias para el uso del espectro electromagnético, aprobando una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones en la cual, entre otros aspectos, se regula la concesión de licencias de manera tripartita asegurando espacios equitativos para estaciones comerciales, comunitarias e institucionales. La implementación de esta nueva ley ha permitido la presentación de más de 100 propuestas para acceder a las concesiones comerciales y más de 500 para la apertura de radios comunitarias en todo el país.²⁷

²⁷ Respuesta No. 41, a las preguntas del Caso hipotético.

Por interpretación del Art. 63 de la Convención, puede sostenerse que la Corte como protectora de los derechos y libertades contenidos en la convención, tiene objetos y fines, preventivos y resarcitorios.²⁸ Bajo estos términos, mediante el nuevo sistema, se han resuelto las demandas de los peticionarios, con respecto al exceso de la discrecionalidad estatal²⁹ para la concesión de licencias en el uso del espectro electromagnético.

La Corte ha sostenido que los modos específicos en que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, comprende diferentes formas, que varían según la lesión producida.³⁰ En ese sentido, la aprobación de una nueva Ley por el Estado, se enmarca dentro de las medidas de derecho interno, que abarca diversas disposiciones relacionadas con la legislación y la jurisdicción domésticas.³¹

“Es así que estas medidas pueden significar, reforma, abolición o derogación de normas incompatibles con la Convención³², o bien, en contrapartida, emisión de disposiciones compatibles, además de necesarias o convenientes.³³

En tales términos en virtud de la nueva ley Chirilagua asumirá criterios más democráticos para las asignaciones de radio y televisión que garantizan una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.³⁴ Con ello se corrige un posible vacío de la antigua legislación en materia de telecomunicaciones.

²⁸ Sergio García Ramírez, Las reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 331

²⁹ Informe de la COIDH, sobre *el Acceso a la Justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II.129Doc. 4 7 septiembre 2007.

³⁰ ICIDH, Casos Garrido y Baigorria, Reparaciones, cit., párr. 41, y Castillo Páez, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 48.

³¹ Sergio García Ramírez, op. cit, pág. 344

³² CIDH, *Caso Castillo Petruzzi y otros, Sentencia del 30 de mayo de 1999* (fondo), párr. 14.

³³ Sergio García Ramírez, op. cit, pág. 344

³⁴ Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 12. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En definitiva, el Estado considera que mediante la instauración de la nueva se satisface parcialmente las solicitudes de los peticionarios ante el sistema interamericano, hecho que ha sido planteado oportunamente, pero sin éxito, tanto ante la Comisión como ante los peticionarios, los cuales no han considerado el interés del Estado en cumplir con las directrices de la Convención.

En tal razón, aunado, a que en razón de las excepciones previamente expuestas, la corte no debe conocer del presente caso, la aprobación de la nueva ley demuestra que Chirilagua se encuentra bajo un gobierno respetuoso de los derechos humanos y que garantiza su pleno vigor,³⁵ así como se enmarca dentro del pluralismo y la tolerancia³⁶ debe reinar en todo Estado democrático.

En tal virtud el Estado espera que la Corte se declare inadmisibile para conocer el presente caso, por no haberse agotado los recursos dentro de la jurisdicción interna, además de que las personas morales no pueden ser peticionarias ante el sistema interamericano, y por último, porque sin haber infringido los derechos contemplados en la convención el Estado ha tomado medidas para aumentar la protección a los derechos contemplados en la misma, empero, en el caso hipotético de que el Tribunal considere admisible la presente demanda, el Estado desarrollará de modo subsidiario los argumentos de fondo.

5.2. ANÁLISIS DE FONDO

5.2.1 La República de Chirilagua no ha violado el artículo 13 de la Convención

El Art. 13 de la Convención reconoce a todas las personas los derechos y libertades de expresar su pensamiento, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, así como el

³⁵ La Comisión et la cour de droits de l'homme Situation actuelle et perspectives d'avenir, Hector Gros Espiell, p. 441.

³⁶ Jean-François Renucci, *Droit Européen des droits de l'Homme*, 2^e édition, éditeur Montchrestien, 2001, p. 461

derecho a recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno,³⁷ bajo estos términos el Estado siempre ha mantenido total respeto a lo expuesto por este artículo.

En palabras de la Corte para que exista algún tipo de violación a la libertad de expresión es necesario que “por medio del poder público se establezcan medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado.”³⁸ Los cuales no son aplicables al presente caso, pues el Estado no prohibió a las emisoras realizar ningún tipo de declaración ni emitir su opinión sobre el Gobierno o los acontecimientos. Chirilagua tiene plena conciencia de que aun existiendo abuso de la libertad de expresión, como en la especie, no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido.³⁹

Por tales razones el Estado, en ningún momento hizo uso de su potestad de “restringir” ni de censurar a las emisoras o a los periodistas. Prueba de esto es, que tanto Radical Radio como Radio Su-Versión, anunciaron e impulsaron sin ningún tipo de impedimento la marcha denominada el “Facebookazo”. Asimismo, hicieron notar su parecer sobre la Papeleta de la Democracia y el Gobierno del Presidente Escalante. Por lo que afirmamos que se les permitió hacer uso de su derecho a la libertad de expresión sin ningún tipo de represalia, hasta tanto fue comprobada la vulneración de las normas internas.

³⁷ Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva No. OC-5/85, *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 13 de noviembre de 1985*. Serie A No. 5, párrs. 30-32. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Supra nota No. 23, párr. 146; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica., supra nota No. 1, párr. 108; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 77, y Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 53.

³⁸ Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135. Párrafo 68. CIDH. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, supra nota No. 27 Párr. 152.

³⁹ Opinión Consultiva OC-5/85, Supra cita No. 27 párr. 39.

Ahora bien, es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, éste puede ser objeto de restricciones,⁴⁰ que normalmente se justificarán “en el respecto de los derechos de los demás y las necesidades colectivas en una sociedad democrática,”⁴¹ en tal virtud nos referiremos a estas restricciones a continuación.

5.2.1.1 Límites de la libertad de expresión

En palabras de esta Honorable Corte los límites a la libertad de expresión se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores, por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales se encuentra contempladas en el Art. 13.2 de la Convención. Y en ese contexto, para poder determinar las responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.⁴²

En ese sentido la Comisión también ha sostenido que los Arts. 13.2 y 13.3 reconocen que la zona de intervención legítima del Estado comienza cuando la expresión de una opinión o una idea interfiere directamente con los derechos de los demás o constituye una amenaza directa y evidente para la vida en sociedad.

El Estado entiende que los límites precedentemente mencionados son aplicables a este caso, por lo cual procederá a explicar cada límite por separado. En un primer plano se abordará la no violación

⁴⁰ Cfr. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, supran nota No.1, Párr.120, *Caso Ricardo Canese*, *supra* nota No. 27, Párr. 92.

⁴¹-Rodríguez Pinzón, Diego El derecho a la Honra y la Reputación, presentado ante el IV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) en septiembre de 1999. artículo disponible en: <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/red/articulos/honra-peru.htm>

⁴² La Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Un Cuarto de Siglo: 1979-2004”. 1ra. Edición, 2005. Pág. 908

a la libertad de expresión desde el punto de vista de las acciones penales en contra de los periodistas, y luego desde el punto de vista del cierre y cancelación de las emisoras de radio.

5.2.1.1 (a) Se encuentra expresamente fijado por la ley

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley⁴³. La expresión *restricción* alude a la conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión.⁴⁴

Los delitos bajo los cuales fueron acusados y condenados los periodistas y propietarios de las emisoras de radio, son de tal envergadura que se encuentran tipificados en la legislación penal de Chirilagua, por lo cual el Estado entiende que “el instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de salvaguardar, a través de la conminación de pena, el bien jurídico que se quiere proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización de dicho objetivo”.

En primer lugar el delito de “Hurto de bienes del Estado”, tiene justificación en que los Sres. Francis Hoffman, Melanie Pereira y Byron Dayle, utilizaron de forma ilícita el espectro radioeléctrico de la nación, que es un recurso valioso natural y escaso, y de gran utilidad para los fines públicos y privados de un Estado.⁴⁵

Con relación a los delitos de “instigación a delinquir” y “difamación”, se tipifican tanto en los periodistas antes mencionados como en el Sr. William Garra, que apoyado por las emisoras Radical Radio y Radio-Su Versión, instigó al odio en contra del presidente Escalante, mediante la emisión de blasfemias e incitación de actos violentos contra el mismo, provocando tal descontrol

⁴³ Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos

⁴⁴ Sergio García Ramírez, Supra nota No. 19., Pág.29

⁴⁵ Chillón, José María. *Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información*, Edición 2004 Pág 305 y 307.

en las masas enardecidas, que en las diferentes marchas se suman alrededor de 18 muertos (entre civiles y policías) y unos 20 resultaron heridos.

En ese orden de ideas el Estado quiere destacar que las condenas impuestas a los periodistas, no ha sido bajo el régimen de una ley de desacato, pues al igual que la Comisión, el Estado entiende que “el fundamento de las leyes de desacato contradice el principio de que una democracia debidamente funcional, que es por cierto la máxima garantía del orden público.”⁴⁶

Las condenas impuestas han sido como consecuencia de la comisión de delitos penales, que se tipifican aún se realicen en contra de personas que no pertenecen al aparato gubernamental, es decir que la legislación de Chirilagua “no brinda a los funcionarios públicos un grado de protección mayor que el acordado a las personas privadas,”⁴⁷ sino que adopta leyes en función del “bien común,”⁴⁸ que contienen descripciones de conducta lo suficientemente precisas como para que los infractores puedan prever las consecuencias legales de sus acciones.⁴⁹

Por tales razones el Estado entiende que las acciones de los peticionarios fueron suficientemente graves como para requerir sanciones penales, que bajó el Código Penal de Chirilagua implicaban las condenas que les fueron impuestas.

5.2.1.1 (b) Se justifica en la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

⁴⁶CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado en el 88º período de sesiones, Washington D.C., 17 de febrero de 1995.

⁴⁷ CIDH, Informe del relator especial para la libertad de expresión, del año 2002, disponible en <http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?IID=2>

⁴⁸ Opinión Consultiva OC-6, *La Expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, serie A No.6*, párr.29

⁴⁹ Strossen, Recent, U.S. and International Judicial Protection of Individual Rights: A Comparative Legal Process Analysis and Proposed Synthesis, 41 Hastings L.J. 805 (1990), p.856

Considerando la especial “trascendencia del ejercicio de la información a través del periodismo, cuyas expresiones llegan a un gran número de personas, la Corte se ha ocupado de examinar la responsabilidad social y ética que entraña el desempeño de esa profesión, ya que es preciso contar con medios que aseguren el ejercicio responsable de ésta.”⁵⁰

La jurisprudencia de la Corte ha señalado que la necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo.⁵¹ En ese sentido la noción de interés general debemos entenderla en los mismos términos en que la Corte caracteriza los conceptos de "orden público" o "bien común",⁵² que no es más que “el conjunto de condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.”⁵³

En el presente caso el funcionamiento sistémico del Estado ha sido perturbado por una serie de actos de violencia y tumultos que inclusive han provocado personas muertas, como consecuencia de la transmisión de informaciones falsas, y de la incitación al odio y la violencia en contra del Presidente de la República y del gobierno en general, lo cual constituye una violación no sólo a las leyes internas de Chirilagua, sino también a la Convención y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que prohíben toda propaganda que constituya una incitación a la hostilidad y la violencia.

El Estado es consciente de que la condición de celebridad pública, conlleva un nivel de protección de los derechos de la personalidad inferior al que puedan gozar y exigir las personas anónimas.⁵⁴ Sin embargo “el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión no significa de modo alguno,

⁵⁰ Sergio García Ramírez / Alejandra Gonza, “Libertad de pensamiento y Expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, Costa Rica, 2007, ISBN: 978-970-765-064-0, pág. 26.

⁵¹ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85, *supra* nota no.27 Párrafo 34.

⁵² Opinión Consultiva OC-6/86, *supra* nota No. 38Párr.29 y 30

⁵³ Opinión Consultiva OC-5-85, *supra* nota No.27 en el mismo sentido Noruega Alcalá, Humberto, Pág.142

⁵⁴ Carrillo, Marc, El Recurso de Amparo y la Protección a la libertad de expresión," Universidad de Pompeu Fabra (Barcelona), Pág.7, en el mismo sentido Corte EDH, Oberschlick C. Austria, sentencia del 1ro de Julio de 1997, párr.29

que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido,”⁵⁵ por lo tanto Chirilagua ha optado por tomar medidas para establecer responsabilidades ulteriores⁵⁶, sobre aquellos que cometieron no sólo “ataques intencionales al honor y la reputación”⁵⁷ del presidente Escalante, sino también ofensas tan graves que provocaron la muerte de muchos chirilaguenses, ocultando dichas acciones bajo supuestos de pluralismo y Libertad de Expresión.

Por consiguiente el Estado quiere destacar que la limitación a la Libertad de Expresión se justifica en las obligaciones mismas del Estado en virtud de los Arts. 1.1 y 2 de la Convención, que contemplan no sólo la obligación de respetar los derechos y libertades proclamados en la Convención, sino también una obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.⁵⁸

Por tanto ello implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención.⁵⁹

⁵⁵ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85, acerca de “La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, del 13 de noviembre de 1985. Párrafo 34.

⁵⁶ Rodríguez Pinzón, Diego, American El derecho a la Honra y la Reputación, supra nota No.,

⁵⁷ CIDH, Relatoría para la Libertad de expresión, artículo sobre responsabilidades Ulteriores por declaraciones, (1996-2004) disponible en <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=153&IID=2>

⁵⁸ Saavedra Alessandri, Pablo, “La Respuesta de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana a las Diversas Formas de Impunidad en casos Graves de Violaciones de Derechos Humanos”, en AA.VV., *La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, p. 389; Cf. Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez*, cit., párr. 165. En ese mismo sentido Marc Carrillo, El Recurso de Amparo y la Protección a la libertad de expresión," Universidad de Pompeu Fabra (Barcelona), pág.71

⁵⁹ Corte I.D.H *Caso Velásquez Rodríguez*, cit., párrs. 166 y 167; Cf. *Caso Juan Humberto Sánchez*. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párrs. 110 y 111 y *Caso Maritza Urrutia*. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 32.

En consecuencia el Estado “tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones al derecho la vida (...) así como castigar la privación de la misma.”⁶⁰

Que en el caso concreto las sanciones a los periodistas han tenido como objeto salvaguardar el Orden público, y la seguridad nacional, así como la protección efectiva de los derechos de quienes perecieron o resultaron heridos en las revueltas provocadas por la incitación periodistas. Por lo que, el Estado, no sólo, no ha violentado la Convención, sino que ha actuado para evitar una violación a la misma por hechos de terceros particulares.⁶¹

5.2.1.1 a (c) *Fue una medida necesaria en una sociedad democrática.*

La Corte ha establecido que "las medidas de restricción deben ser las necesarias para asegurar la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención."⁶²

En ese sentido el Estado quiere destacar, que cuando aquellos que ejercen el periodismo empañan sin base legal o razón válida la reputación de una persona y a sabiendas que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas,”⁶³ debe responder a las autoridades y al público por sus acciones. Las acusaciones hechas a las supuestas víctimas fueron realizadas con justificación

⁶⁰ Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99 Párr.110

⁶¹ 24 Cf. Corte IDH., *Caso Goiburú y otros. Sentencia sobre Fondo. Reparaciones y Costas.* Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, voto razonado juez García Ramírez, párr. 22; *Caso Gómez Palomino* Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, voto concurrente jueza Medina Quiroga, párr. A3 y Montiel Argüello, Alejandro, “Los Sujetos de las Violaciones de los Derechos Humanos”, en AA.VV, *Gros Espiell, Héctor, Liber Amicorum*, Vol. 1, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1997, p. 889.

⁶² Opinión Consultiva OC-5/85, *supra* nota No. párr. 79

⁶³ Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 6. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

legal por el Ministerio Público persiguiendo proteger el interés general y buscar justicia ante el daño irreparable sufrido por quienes perecieron, o resultaron heridos.

El Estado es consciente que la Libertad de expresión y el debate público son “fundamentos esenciales en una sociedad democrática.”⁶⁴ No obstante éstas no pueden ser absolutas, para que el Estado pueda imponer una serie de restricciones o sanciones,⁶⁵ cuando el ejercicio del derecho del derecho deviene excesivo. Que en el presente caso las acusaciones sobre difamación han sido necesarias, sobre todo en el caso del Sr. William Garra que con el apoyo de las emisoras, adujo que el Gobierno enviaría a la Guardia y a personas ajenas a la misma a impedir las manifestaciones, hechos que eran falsos, y que provocaron una situación de inseguridad en el Estado así como el descrédito de las instituciones democráticas.

En ese sentido debe indicarse que atentar contra el Presidente de un país es atentar contra la misma nación ya que “la crítica de los funcionarios públicos puede tener un efecto desestabilizador para el gobierno nacional dado que ella se reflejaría no sólo en el individuo objeto de la crítica sino en el cargo que ocupa y en la administración a la que presta servicios”.⁶⁶

A lo largo de sus argumentos el Estado ha querido demostrar que la conducta de los periodistas ha tenido consecuencias graves en la población Chirilaguense, pues como se ha sostenido previamente el Estado no puede pasar por desapercibido estas acciones que atentan contra el orden público y contra toda sociedad democrática.

Se ha comprobado que los medios de comunicación “pueden influir en la conducta a través del modelado, la desinhibición, la desensibilización, el despertar sentimientos agresivos y el estímulo

⁶⁴ Corte EDH, Caso *castells c. España*, del 23 de abril de 1992, párr42, en el mismo sentido. CEDH, en el mismo sentido Caso *Handyside c. el Reino Unido*, 7 de diciembre de 1976, párr. 49

⁶⁵ Corte EDH, Caso *Catells C. España*, supra nota No 54, párr.46

⁶⁶ “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994”, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. 1995. Capítulo V, Pág. 212.

de la asunción de riesgos. La exposición a material violento aumenta las fantasías violentas, especialmente en los hombres, siendo los jóvenes muy vulnerables a este tipo de exposición.”⁶⁷

En ese sentido el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha reconocido la gran influencia que causa la radio entre sus receptores, tomando en cuenta que “la radio es inmediata, presente y activa”⁶⁸, así como que la radio “intensifica el sentimiento de miedo, la sensación de peligro y el sentido de urgencia que da lugar a la necesidad de acción por parte de los oyentes”.⁶⁹ Prueba de esto es lo sucedido durante el genocidio de Rwanda en 1994. La emisora de radio denominada “Radio Télévision Libre des Mille Collines” (RTLM) jugó un rol importante durante el conflicto promoviendo la hostilidad y la violencia que se vivió en ese entonces a través de una propaganda pro-racismo. Esto aumentó la cantidad de muertos y provocó una atmósfera de violencia, inclusive mayor que la que se estaba viviendo.

Por tales motivos el Estado entiende que la limitación a la libertad de expresión se encuentra justificada, en el uso abusivo del derecho por parte de las emisoras Radical Radio y Radio-su versión, hasta el punto de que las informaciones vertidas en las mismas provocaron la muerte de 4 personas y 15 resultaron heridos. La marcha denominada el Facebookazo se realizó cerca de las elecciones para evitar la participación popular en las mismas, inclusive en Radical Radio se invitó a lanzar tierra durante la marcha. Mientras que Radio Su-Versión transmitió erróneamente un dato que provocó que esta marcha se encontrara con otra que se estaba realizando a favor del Gobierno, lo que a su vez estimuló enfrentamientos, y producto de esto hubo muertos y heridos.

⁶⁷ Kaplan & Sadock. “Sinopsis de Psiquiatría”. Editora Lippincott Williams & Wilkins. 10ma. Edición. España, 2008. Pág. 152.

⁶⁸ Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Caso de la Fiscalía vs. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze. (International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze Case). “The radio is immediately present and active”.

⁶⁹ “Radio heightened the sense of fear, the sense of danger and the sense of urgency giving rise to the need for action by listeners. Supra nota No. 58”

Asimismo, el día de las elecciones jóvenes tomaron las urnas con el fin de prenderles fuego, lo que demuestra que el verdadero fin no era demostrar su parecer sobre la situación política, sino crear un ambiente de zozobra y desestabilizar las instituciones democráticas mediante turbas delincuenciales.

Por tales motivos, Chirilagua no ha infringido la Convención, pues todas las acciones se realizaron con total apego a las normas internas del Estado, así como de los derechos contemplados en la Convención. Por el contrario, las acciones, no sólo fueron necesarias, sino también proporcionales al daño causado. Además, de que en caso de no llevar a estos agentes ante la Justicia, acarrearía una impunidad insultante para con la población chirilaguense.

5.2.1.1 Cancelación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico de Radical Radio y cierre de Radio Su-Versión.

Es conocimiento del Estado que “las restricciones a los medios de difusión lo son también, a la libertad de expresión”⁷⁰, de tal modo que, el Estado ha tenido especial cuidado en que las cancelaciones y cierres de emisoras, se haga con total apego a la normativa vigente. La cancelación de la emisora Radical Radio, se basó en la violación de los requisitos consagrados en la legislación, que conjuntamente con 39 emisoras más, se encontraba en incumplimiento de los requisitos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, según la revisión realizada por la COFERETEL, en fecha 15 de marzo de 2008.

La cancelación de la concesión a Radical Radio se basó en una violación al Art. 92 de la referida Ley, en razón de las irregularidades en las que se encontraba la titularidad y la representación legal de la misma. Si bien es cierto que la Sra. Pereira no recibió respuesta al solicitar que le

⁷⁰ Opinión consultiva, supra nota.

fuesen aclaradas las inconsistencias previstas, no es menos cierto que, a sabiendas de la problemática, la misma no hizo ningún esfuerzo en obtener algún tipo de confirmación sobre la corrección de las irregularidades, queseándose así con una simple presunción. En ese sentido “la afirmación necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del concesionario.”⁷¹

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha sostenido que toda concesión del Estado a personas o individuos, en caso de duda la interpretación debe ser en contra de los concesionarios, porque la presunción más próxima a la verdad es la que el Estado ha acordado sólo lo que en términos expresos resulte de ellos.⁷²

Con relación a Radio Su Versión es aún más grave, pues la misma no poseía concesión alguna para el uso del espectro electromagnético, de modo que operaba en flagrante violación de la Ley. En términos generales se reconoce que el servicio público debe ser regulado “por normas de Derecho público, para garantizar la plena satisfacción del interés general, a esos efectos, esta técnica posibilita la aplicación de las potestades públicas, como la expropiación, limitaciones de la propiedad y el uso especial de bienes, así como sanciones administrativas y aún penales.”⁷³

La concesión es una de las tareas esenciales de las autoridades reguladoras en el sector de la radio difusión, la cual “sólo puede ser otorgada a aquellos que apliquen y cumplan los requisitos establecidos en la legislación.”⁷⁴ A ese respecto la libertad de expresión “no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de

⁷¹ Consideraciones sumarias sobre la concesión de servicios públicos a propósito de la 4ta Conferencia Nacional de abogados, p. 52, citado por Gordillo, la interpretación restrictiva de concesiones y privilegios LL, 1995-222y ss.

⁷² Corte suprema de los Estado Unidos 97 US. 659, citado por Malajar, Daniel Edgardo, supra noto No. Pág.314

⁷³ Pág. Daniel Edgardo Malja,op.cid, pág.321

⁷⁴ José María Chillón, op. cid.

autorización previa,”⁷⁵ como en el caso de la especie. De modo que a Radio Su-Versión nunca le fue adjudicado el uso del espectro electromagnético, por no cumplir con los requisitos contemplados en la Ley.

El Estado quiere recalcar que ni la cancelación de la concesión de Radical Radio, ni el cierre de Radio Su-Versión se realizó con motivo de las críticas hechas al Gobierno en sus programas, ni por haber apoyado la marcha. Sino más bien como una antesala para la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones (como se ha explicado en las excepciones preliminares), que requería una revisión para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo.

Por tanto, el Estado no ha violentado el Art. 13 de la Convención ya que sus acciones se encuentran justificadas en una Ley vigente, la cual no era incompatible con la Convención. Desde su independencia, Chirilagua ha adoptado todas las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derecho y libertades garantizados por la Convención.⁷⁶

Ni la cancelación de la concesión de Radical Radio, ni el cierre de Radio Su-Versión puede verse como una violación a la libertad de expresión, sino más bien como una acción destinada a garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales del Estado.

5.2.2 La República de Chirilagua no ha violado el Art. 8 de la Convención

En los términos del artículo 8 “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada

⁷⁵ Art. 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobado en Roma, 4.XI.1950

⁷⁶ CIDH, Informe No. 22/94, caso 11.02, solución amistosa, 20 de septiembre de 1994.

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”⁷⁷

De la misma manera, en palabras de esta Honorable Corte el artículo 8 se refiere al llamado “‘debido proceso legal’, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”⁷⁸ No es posible hablar de verdaderas y propias garantías judiciales⁷⁹ sin un adecuado respeto a los requisitos que deben observarse en las distintas instancias procesales.

A este respecto el Estado es consciente de que dichas garantías no sólo son aplicables a los procesos penales, pues “en el marco del sistema interamericano, es clara la vigencia de las reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados a derechos sociales”.⁸⁰ No obstante, el Estado observa que las alegaciones de las víctimas acerca de la violación al Art. 8, se plantean en términos generales, sin especificación alguna de cuáles son los alegados derechos transgredidos en términos de este artículo. Por lo que el Estado delimitará los supuestos bajo los cuales podría referirse la víctima cuando alega una violación al debido proceso legal.

5.2.2.1 Plazo Razonable

En toda controversia deben ser garantizadas y respetadas todas las formalidades que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho⁸¹. En ese tenor, recae en

⁷⁷ Artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

⁷⁸ Corte IDH., Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, Serie A, párrafo 28.

⁷⁹ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, *op.cit.*, párrafo 30.

⁸⁰ Informe de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, Doc. 4, del 7 septiembre 2007, p.98

⁸¹ *Cfr.*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica* .Fondo. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párr. 56; *Caso Maritza Urrutia*. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. Párr. 47.

el Estado el deber de salvaguardar las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso⁸² dentro de un plazo razonable, por ser dichas garantías idóneas para asegurar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la Convención.⁸³

Como bien hemos señalados, dentro de esas formalidades que deben ser observadas se encuentra el plazo razonable. Tanto esta Ilustre Corte como la Europea han sostenido que para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso es preciso tener en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.⁸⁴

En el presente caso es innegable la rapidez con la cual fueron respondidas las solicitudes y falladas las demandas ante las instancias judiciales, demostrando la efectividad y agilidad de los tribunales de Chirilagua, teniendo en cuenta que dichos recursos fueron contestados en plazos menores de un mes. En pero, es necesario aclarar, que ante fisiología del caso, un plazo breve no puede traducirse como impunidad, al no revestir el caso complejidad alguna, pues “un elemento esencial para la efectividad de un recurso es la brevedad del mismo. El derecho a la Protección Judicial requiere que las Cortes adjudiquen y decidan casos de forma expedita, particularmente en casos urgentes.”⁸⁵

5.2.2.2 *Derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior*

Esta Benemérita Corte ha sostenido que el “derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia

⁸² Cfr. Corte IDH. *Yatama Vs. Nicaragua*. Fondo. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Párr. 148 busca jurisprudencia Cfr. Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Párr. 69

⁸³ Cfr. Corte IDH. *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia*. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. Párr. 20

⁸⁴ Cr. Corte IDH, *Vargas Areco vs. Paraguay*, Sentencia 26 de septiembre de 2006, Serie C, No. 155, párrafo 102.

⁸⁵ IBIDEM

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.”⁸⁶

Tanto el Sr. Dayle, como la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman interpusieron recursos de apelación, sin ningún tipo de oposición o inaccesibilidad⁸⁷. Asimismo, estos recursos fueron contestados por un Juez superior e imparcial.

5.2.2.3 *Garantía en el Proceso Administrativo*

Desde su independencia el Estado de Chirilagua se rige bajo la normativa de un Estado democrático, con respeto total a los derechos humanos, y por consiguiente considera que “las reglas del debido proceso y las garantías judiciales deben aplicarse no sólo a los procesos judiciales, sino a cualesquiera otros procesos que siga el Estado.”⁸⁸ No obstante, cabe señalar “que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso”.⁸⁹

El proceso administrativo mediante el cual le fue cancelada la concesión para el uso del espectro radioeléctrico a Radical Radio y Radio Su-Versión fue realizado con el debido respeto de los derechos de los afectados, no obstante es innegable el uso ilícito del espectro radioeléctrico, no sólo por las emisoras antes mencionadas sino también por otras 38 emisoras, a las cuales del mismo modo les fueron canceladas las concesiones para operar.

En el caso particular de Radio Su Versión, la misma nunca obtuvo una concesión por parte de la COFERETEL. Mientras que Radical Radio, si bien obtuvo una concesión del órgano regulador,

⁸⁶ Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, serie 107, párrafo 158.

⁸⁷ Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Op. cid, párrafo 16.

⁸⁸ Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*, párrs. 102-104; *Caso Baena Ricardo y otros*, párrs.124-126; *Caso del Tribunal Constitucional*, párrs. 69-71; y en igual sentido, *Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos* (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, párr. 28

⁸⁹ Corte IDH. Opinión Consultiva oc-11/90del, op.cid, párrafo 28.

cuando la misma operaba bajo el nombre de Radio Cadena Básica, dicha concesión no fue renovada, y ello en virtud del Art. 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones otorga al Estado la facultad para otorgar o renovar “por tiempo limitado” el uso del espectro electromagnético⁹⁰. Al éste no tener un tiempo de uso ilimitado, de modo que si el órgano regulador entiende que las circunstancias bajo las cuales se ha otorgado una concesión han sido modificadas, puede hacer uso de la potestad que le otorga la Ley para limitar o no renovar la concesión para el uso del espectro radioeléctrico, como es el caso de la especie, sin que ello implique una transgresión al debido proceso legal.

De manera que la cancelación de la concesión se encuentra fundamentada en la Ley, la cual contiene los requisitos para que COFERETEL pueda otorgar una licencia, así como también las circunstancias bajo las cuales deben de ser canceladas las concesiones, por lo que el Estado no ha actuado con arbitrariedad en sus decisiones. Bajo estos supuestos Chirilagua reafirma que no ha transgredido la Convención bajo los términos del Art. 8 de la Convención, pues para el “Estado el respeto irrestricto de los derechos humanos es la base de una sociedad justa, digna, democrática y representativa”⁹¹.

5.2.3 Chirilagua no ha violado el Art. 25 de la Convención

La Corte ha atribuido al Estado funciones de protección de los Derechos Humanos de todas las personas bajo su jurisdicción⁹², a través de la consagración normativa de un recurso judicial efectivo y adecuado contra actos violatorios de los Derechos Humanos contemplados tanto en la

⁹⁰ Ver nota al pie del Caso Hipótecio (Radical Radio y Otros vs. Chirilagua), pág.3

⁹¹ CIDH, Informe N° 98-00, Caso 11.783, Marcia Irene Claviejo Vs Ecuador, 5 de octubre del 2000, párr..10

⁹² Cfr.; Corte IDH. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. Párr.163; Corte IDH. *Caso Durand Ugarte Vs. Perú*. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. Párr. 101; Corte IDH. *Caso Cesti Hurtado Vs. Perú*. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56. Párr. 121.

Convención, como en la Constitución y las leyes⁹³. En ese sentido, un recurso se considera adecuado cuando sea capaz de proveer un remedio a las violaciones alegadas;⁹⁴ y su efectividad se determina en relación a la capacidad del mismo para tutelar tangiblemente los derechos que se reputan transgredidos.⁹⁵

En razón de lo anterior, el Recurso de Amparo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.⁹⁶ Lo anterior en virtud, de que el precitado recurso comporta las características de efectivo y adecuado para salvaguardar los Derechos Humanos y para salvaguardar la integridad de las presuntas víctimas.⁹⁷

En la especie, debemos señalar que Chirilagua, en cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, consagra la institución procesal del amparo para tutelar los Derechos Fundamentales, el cual fue instaurado por la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, a los fines de preservar el respeto total de los derechos consagrados en la Convención.

En ese tenor, el Estado de Chirilagua ha garantizado la existencia de “un recurso sencillo y eficaz,”⁹⁸ toda vez que los Sres. Dayle, Pereira y Hoffman, presentaron de manera separada dos recursos constitucionales por parte de cada emisora radial en contra de la decisión administrativa que ordenó el cierre de las mismas; el primero en fecha 30 de abril de 2008, y el segundo en fecha 5 de mayo de 2008. Ambos recursos fueron contestados en menos de un mes por el Tribunal

⁹³ Cfr. Corte IDH. *Acevedo Jaramillo y Otros vs. Perú*. Fondo. Sentencia del 7 de febrero del 2006. Serie C No. 144. Párr. 214.

⁹⁴ Cfr. Corte IDH. *Caso Mariblanca Staff Wilson y Oscar E. Ceville Vs. Panamá*. Informe 89/03. Petición 12. 303 de fecha 22 de octubre del 2003. Párr. 40.

⁹⁵ Cfr., Corte IDH. *Carranza Vs. Argentina*. Informe No. 30/97. Caso 10.807 del 30 de septiembre de 1997. párr. 71 y párr. 73-75.

⁹⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120. Párr. 31.

⁹⁷ Cfr.; Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Párr 91

⁹⁸ Corte IDH. *Caso Barrios Altos vs. Perú*, párrafo 45.

denegando la acción de constitucionalidad en razón de que la cancelación de la licencia se realizó en cumplimiento de la Ley.

En ese sentido la violación al Art. 25 implicaría la no existencia de un recurso efectivo, que permita “proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.”⁹⁹ Partiendo de esta premisa, en el caso de la especie existe un recurso ordinario, que ha sido la interposición de una demanda ante los Tribunales Administrativos y varios recursos interpuestos ante los Tribunales Constitucionales, de modo que si bien el Estado es consciente que su obligación no es sólo consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también “asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de las autoridades judiciales.”¹⁰⁰

Por lo que no existe punto de partida alguno por el cual se pueda alegar que dicho recurso no ha sido ejercido por los jueces competentes, respetando las garantías del debido proceso legal, de manera que corresponde a las víctimas probar en qué aspecto sería violatorio al Art. 25 de la Convención las acciones de los Tribunales Nacionales de Chirilagua. Teniendo en cuenta que el hecho de que el Juez no haya fallado a su favor o que el recurso no haya sido acogido en favor de las víctimas no signifique de modo alguno una violación a la Convención o una mala práctica de los jueces, sino más bien que se ha actuado en miras del buen Derecho y de preservar la justicia ya que las acciones establecidas por Chirilagua fueron realizadas de acuerdo a la Opinión Juris, siendo estas actuaciones una obligación legal del Estado.

En ese orden de ideas “no se debe presumir con ligereza que un Estado Parte en la Convención ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces,”¹⁰¹ pues “el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra, por sí

⁹⁹ Corte IDH., Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6), párrafo 25.

¹⁰⁰ *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala*, párrafo 237.

¹⁰¹ Corte IDH. *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr.84

solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces.”¹⁰² Por lo que en ese orden no habido violación alguna a la Convención por parte del Estado ya que sus Tribunales actuaron de acuerdo a lo establecido en la normativa y en miras a hacer una correcta aplicación del Derecho.

6. PETITORIO

Tomando en consideración los argumentos que han sido planteados y los hechos probados, el Estado solicita a esta Honorable Corte que se declare:

- a) La inadmisibilidad de la demanda por no haberse agotado los recursos internos de Chirilagua, conforme al Art. 46 de la Convención.
- b) La inadmisibilidad de la demanda por no tener esta Distinguida Corte la capacidad de conocer las demandas de personas jurídicas.
- c) La inadmisibilidad de la demanda porque se ha modificado la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Subsidiariamente solicitamos a esta Excelentísima Corte declare:

- a) Que Chirilagua no es responsables internacionalmente por la supuesta violación a los Arts. 8, 13 y 25 de la Convención en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso, por lo que no puede reclamársele ningún deber de reparación a su cargo.

¹⁰² *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales*, supra, p.92